



La expulsión de criminales por parte de Sheinbaum tiene más que ver con apaciguar a Trump que con mantener a México seguro.

Óscar López
en la Ciudad de México

Quizás no sea coincidencia que el momento de las discusiones sobre aranceles fuera seguido de cerca por el traslado de criminales buscados.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado que **el traslado de 26 presuntos miembros de un cártel a Estados Unidos** fuera parte de algún tipo de acuerdo con Washington y que, en cambio, se tratara de las propias prioridades de seguridad de su país.

La expulsión de esta semana marcó la segunda vez que México envía a importantes criminales a Estados Unidos este año: en febrero, las autoridades mexicanas **entregaron a 29 miembros del cártel**, incluido el capo de la droga Rafael Caro Quintero, responsable del asesinato de un agente de la DEA en 1985. Las últimas transferencias tuvieron lugar después de que las autoridades estadounidenses prometieran que los fiscales **no buscarían la pena de muerte** en ninguno de los casos.

Pero a pesar de las afirmaciones de Sheinbaum y otros en su gobierno, los analistas dicen que estas transferencias tienen menos que ver con la seguridad nacional de México y más con apaciguar a Donald Trump, quien ha hecho de la persecución de los cárteles de la droga una política distintiva de su administración, llegando incluso a designar a varios grupos criminales mexicanos como **organizaciones terroristas extranjeras**.



“Creo que [Sheinbaum] cree que puede despresurizar enviando a un grupo de narcos que ya están detenidos... como una ofrenda para apaciguar la sed de Washington por criminales mexicanos”, dijo Tony Payan, experto **en México** del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. “Simplemente los están subiendo a un avión y ofreciéndolos en bandeja de plata”.

Sheinbaum dijo que la expulsión de 26 criminales de grupos del crimen organizado, incluidos los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, no estaba relacionada con los esfuerzos para alcanzar un nuevo acuerdo de seguridad con Estados Unidos.

Entre los entregados a las autoridades estadounidenses estaban Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, un grupo criminal estrechamente aliado con el cártel de Jalisco, así como Roberto Salazar, buscado en relación con el asesinato de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles en 2008. “En todos estos casos, la extradición o el traslado de estos miembros del crimen organizado, la decisión es por la seguridad de nuestro país”, declaró durante una conferencia de prensa el miércoles. “Tampoco tienen nada que ver con el acuerdo de seguridad; son decisiones soberanas tomadas por la seguridad de nuestro país”.

El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, se hizo eco de sus comentarios y dijo que la medida se había tomado para evitar que los criminales convictos siguieran dirigiendo sus organizaciones desde tras las rejas.

“Esta acción se tomó para evitar que desde la cárcel se sigan ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, afirmó.

Sheinbaum ha **tomado numerosas otras medidas para acabar** con el narcotráfico en un esfuerzo por apaciguar a la administración Trump, incluido el despliegue de miles de tropas en el estado de Sinaloa, un bastión del cártel, el arresto de docenas de narcos de alto nivel y la incautación de **grandes cantidades de fentanilo**.

Sin embargo, Sheinbaum aún enfrenta una creciente presión de la **administración Trump** en cuanto a aranceles económicos que perjudicarían la economía mexicana. Quizás no sea casualidad que el momento de las negociaciones arancelarias haya sido seguido de cerca por el traslado de delincuentes buscados de México a Estados Unidos.



Las transferencias de febrero se produjeron mientras las autoridades mexicanas intentaban posponer la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas por parte de la administración Trump. Esta última ronda de 26 transferencias ilegales se produce apenas unas semanas después de que Trump hablara con Sheinbaum y acordara retrasar la amenaza de aranceles del 30% por 90 días más.

“Al final, México no ha enfrentado los niveles de aranceles que debían entrar en vigor debido al tráfico de fentanilo el 1 de febrero”, dijo Cecilia Farfán-Méndez, analista de seguridad de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. “Este tipo de transferencias, que para el gobierno mexicano no son necesariamente costosas, son una forma de avanzar en Washington D. C.”.

Sheinbaum “está tratando de mostrarle a Washington que es flexible, que es cooperativa, que es receptiva, que está dispuesta a hablar y que está dispuesta a ceder”, agregó Payán.

Sin embargo, según Ilan Katz, jefe de la comisión de derecho penal del Colegio de Abogados de México, la afirmación del ministro de seguridad Harfuch de que estos criminales siguen representando una amenaza en México incluso tras las rejas no carece de fundamento.

“Los narcos en México han tenido una gran capacidad operativa incluso durante su confinamiento”, dijo. “Una de las soluciones es expulsar eficazmente de la cárcel a cualquier narcotraficante que pueda tener vínculos con sus grupos criminales”.

“Los narcos en México han tenido una gran capacidad operativa incluso durante su confinamiento”, dijo. “Una de las soluciones es expulsar eficazmente de la cárcel a cualquier narcotraficante que pueda tener vínculos con sus grupos criminales”.

[Sheinbaum's expulsion of criminals is more about placating Trump than keeping Mexico safe | Mexico | The Guardian](#)